

Una agenda democrática frente al conflicto

Por Eduardo Posada Carbó

La respuesta frente a la guerra en Colombia no es la "paz", sino la democracia. Me explico. Durante los últimos años, el diagnóstico dominante tendió a definir el conflicto como un problema de violencia generalizada, entre ciudadanos, en el que el enfrentamiento entre grupos armados ilegales y el Estado sería apenas un síntoma de una crisis estructural y profunda. De tal diagnóstico surgió una noción de "paz" asociada con la "reconciliación nacional", e identificada con las posibilidades de lograr el más amplio consenso alrededor de un nuevo modelo de sociedad.

Obsérvese cómo, en tal concepción, la paz sugerida no sería ante todo la reconciliación entre el Estado - como representante de la sociedad -, y los grupos armados que le disputan a la fuerza su autoridad. No. Lo que allí se está sugiriendo es una supuesta paz entre todos los colombianos - la "reconciliación nacional" -, como si aquí estuviésemos en guerra todos contra todos, o como si las acciones violentas de las organizaciones criminales representaran la voluntad popular. Así definida, la paz anhelada parecería identificarse con un gran acuerdo social, con ese amplio paquete de reformas que servirían para apagar los innumerables conflictos cotidianos que explicarían la violencia. Este diagnóstico, y su consiguiente propuesta de paz, fueron adoptados por el discurso gubernamental desde la administración Betancur (1982-86). Se mantuvieron con algunas variaciones durante los dos gobiernos que le sucedieron - Barco (1986-1990) y Gaviria (1990-94). Y se consolidaron con fuerza bajo el gobierno de Samper (1994-98), aunque más aún durante el proceso de paz de la administración Pastrana (1998-2002). En ningún caso, es importante advertir, los gobiernos estuvieron aislados del clima de opinión al concebir así tanto la naturaleza del conflicto como el camino hacia la paz. Allí coincidieron en general, con todos los gobiernos, amplios sectores políticos, académicos, intelectuales, empresariales, espirituales, sindicales - en fin, la llamada sociedad civil.¹ * * * * *

Baste como ejemplo la conceptualización del problema por parte de la Comisión de Conciliación Nacional - convocada por el Episcopado colombiano, e integrada por prestante dirigentes de la iglesia, del mundo político, académico y sindical, ex-generales y representantes de los medios y de otras organizaciones sociales. En el segundo borrador de un documento sobre el tema, que fue "objeto de análisis y seminarios por parte de diversos sectores... a partir de mayo de 1997", puede apreciarse muy bien la noción de paz que ha predominado en el país durante la últimas décadas.² Aunque La Comisión de Conciliación Nacional se cuida en observar que "la paz no es ausencia de conflictos", su definición está muy cerca a esa utopía: "paz en sociedad es la instauración de un orden justo y seguro en el que todos los hombres puedan satisfacer a plenitud las necesidades materiales y espirituales que emanan de la dignidad". Lo opuesto a la paz son las "injustas desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales". Para construir esta "paz social" es necesario formar una "cultura de paz" a través de una pedagogía "para la paz". La Comisión señala algunos postulados para la construcción de la paz, entre ellos: el respeto de los derechos humanos,

¹ Para una discusión más sistemática sobre estos puntos, véase Eduardo Posada Carbó, Malcolm Deas y Charles Powell, La paz y sus principios (Bogotá: Libros de Cambio y Fundación Ideas para la Paz, 2002).

² "Hacia la estructuración de una política nacional permanente de paz", Bogotá, julio de 1998.

la equitativa distribución de los bienes, la justicia social, y un nuevo modelo económico. Interesa señalar que en ninguna de las tres páginas y media (pp.10-13) que se dedican allí a definir la paz se menciona expresamente la confrontación entre el Estado y las guerrillas. Aunque más adelante el documento anota que la Comisión habría "circunscrito su acción a encontrar una solución política negociada al conflicto armado", es claro que su propuesta de paz es mucho más amplia. "Una política permanente de paz", expresa el documento en un capítulo posterior, "no se agota en la solución política negociada del conflicto armado... La reconciliación entre los colombianos exige un gran esfuerzo, tendiente a superar las causas más profundas que generan los múltiples tipos de violencia y sus devastadores efectos". Hay que detenerse, una vez más, en el sentido de esta concepción de la paz, donde lo que predomina es la supuesta necesidad de reconciliación entre todos los ciudadanos, y no la posible negociación - y bajo qué condiciones -, entre el Estado y sus enemigos en armas. En esta confusa noción de paz, a pesar de sus loables propósitos, se origina en buena parte la perpetuación del conflicto: alimenta una agenda de prioridades equívocas, postpone la discusión sobre la eventual desmovilización y reintegración de los grupos subversivos, e implícitamente justifica y alienta el discurso revolucionario. Por eso es urgente revisar esta noción de paz y ese consenso maximalista que propicia. En su lugar, me parecería más apropiado enfocar la discusión alrededor de un posible acuerdo democrático, es decir, de las reglas de juego y los procedimientos que le permitan a los grupos subversivos incorporarse en la vida política y luchar así por sus objetivos no con la fuerza de las armas sino con el poder legítimo de los votos. Este es el sentido de la frase con que introduce este breve ensayo: la respuesta a la guerra en Colombia no debería ser entonces la "paz" - esa paz como se ha entendido predominantemente hasta ahora -, sino la democracia. * * * * *

Me parece que el debate nacional se ha movido lenta y gradualmente en esa dirección, tras el fracaso del anterior proceso de paz, pero sobre todo después de la elección del Presidente Uribe.³ Sin embargo, las recientes declaraciones de James LeMoyne, asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas, sugieren regresar otra vez a un diagnóstico que ha servido tan poco para darle pronto fin al conflicto. Por el contrario, como lo he señalado, puede haberlo trágicamente prolongado. LeMoyne vuelve a insistir en la teoría de las "causas objetivas" de la violencia, y a defender una agenda de negociación amplia y sustantiva. Según él, los problemas sociales que sufre el país, "son generadores de violencia y le dan la razón a la guerrilla". Si no se incluye en una eventual negociación las reformas "que el país necesita", ... "la guerrilla no va a negociar".⁴ Dada su autoridad, como representante de tan importante organización internacional - en la cual el Gobierno y buena parte de la sociedad civil han puesto grandes esperanzas -, sus palabras corren el riesgo de ser tristemente auto-proféticas, al reforzar además las mismas percepciones de los grupos guerrilleros. ¿Y es que acaso existe - no en ésta, sino en cualquier democracia -, un consenso social sobre las reformas que "el país necesita"? Es más fácil hablar de ellas que adoptar fórmulas concretas. ¿Y quién adopta esas reformas? ¿Las cúpulas del gobierno y las guerrillas? Más aún, las palabras de LeMoyne parecen ignorar que el país democrático

³ Véase, por ejemplo, el ensayo de Jorge Armando Rodríguez, "Colombia: Más allá de las 'causas objetivas'", El Malpensante, no.45, marzo16-abril 30 de 2003. Véase también su ensayo más reciente, sin publicar, "La retórica del miedo de la democracia".

⁴ "¿Dónde están los políticos de las Farc?", El Espectador, mayo 18 de 2003. Véanse también sus declaraciones en El Tiempo, mayo 18 de 2003.

ha venido discutiendo, y efectivamente adoptando reformas - como en el campo político, con la elección popular de alcaldes, o las otras reformas introducidas por la constitución de 1991. No es cierto además que aquí no se haya "reconocido la necesidad de cambios profundos", como lo expresa LeMoyne de forma simplista, ignorando nuevamente la discusión democrática en Colombia. Basta leer el documento citado aquí de la Comisión de Conciliación Nacional, integrada por prestantes dirigentes del país. Ese ha sido además, hay que insistir, el diagnóstico predominante por más de dos décadas. Mas aún LeMoyne, en sus declaraciones, hace caso omiso de una verdad que ha comenzado a reconocerse por amplios sectores académicos e intelectuales: que la lucha guerrillera ha retardado el proceso de cambio en Colombia. Ya en 1992, un grupo de intelectuales colombianos, encabezado por el Premio Nobel Gabriel García Márquez, le observó a la guerrilla que "su forma de lucha... en lugar de propiciar la justicia social... ha generado toda suerte de extremismos".⁵ Más recientemente, el historiador Malcom Deas sugirió que "el efecto final del conflicto armado" habría sido quizá "reaccionario, que el país y sus políticas hubieran sido más progresistas sin la presencia del conflicto".⁶ Lo que aquí está en discusión es un punto fundamental cuya importancia desconocen las declaraciones de LeMoyne: si la guerrilla acepta o no los mecanismos democráticos - es decir, la conducta no violenta, la participación en política - , para exponer y defender sus plataformas. Esta sería además la única forma quizá de saber a ciencia cierta si la guerrilla desea en serio negociar. LeMoyne menciona el proceso de Irlanda del Norte como ejemplo de una paz conquistada sobre la base de negociaciones sustantivas. Sin embargo, algunos analistas del Good Friday Agreement han destacado precisamente que allí las partes en disputa siguen defendiendo agendas irreconciliables, sobre las cuales no hay aun acuerdo: "escasamente lograron un consenso, pero pueden haber establecido un modo de conducta política no violenta". Transformar el conflicto en diálogo: éste habría sido, según Jonathan Stevenson, el logro del proceso en Irlanda del Norte, un logro de todas formas aún limitado y con problemas.⁷ Y este fue el sentido de los principios expuestos por el Senador Mitchell como condición para llegar a la mesa de negociaciones: entre ellos, renunciar a la violencia y aceptar exclusivamente los medios democráticos en la búsqueda de fines políticos. * * * * *

LeMoyne dice que los oficios de las Naciones Unidas están "enfocados en buscar, nutrir y reforzar cualquier intento serio de solución negociada al conflicto armado". Todas las predicciones parecen indicar, una y otra vez, que el problema terminará resuelto en una mesa de negociación. Y, en efecto, el gobierno del Presidente Uribe no ha cerrado esta vía. Pero no sería serio regresar a una noción maximalista de la paz, como la que predominó con tantas frustraciones en el pasado. Como no es serio ignorar de manera tan ligera los desarrollos del debate nacional en las últimas décadas, y desconocer así mismo la disposición reformista de muchos y significativos sectores del país, tanto en el Estado como en la sociedad. Lo serio sería aceptar la necesidad de replantear tanto diagnóstico errado que sólo ha servido para generar tantas tragedias.

⁵ Véase el texto completo de la carta en El Tiempo, noviembre 22 de 1992.

⁶ Malcolm Deas, "Siete tesis disidentes", Cambio, junio 26 de 2000. En artículo reciente, el historiador Jorge Orlando Melo expresó: "The violence of this war - and the demonic responses it has generated - has made Colombia more unjust, poorer and more rigid, but much has still been transformed"; Melo, "A Hundred Years of Change", ReVista. Harvard Review of Latin America, vol II, no. 3, Spring 2003

⁷ Jonathan Stevenson, "Irreversible peace in Northern Ireland", Survival, vol 42 (3), 2000.